

La aplicación del Concilio de Trento en las catedrales: el cabildo de Plasencia y el concilio provincial compostelano de 1565

IGNASI FERNÁNDEZ TERRICABRAS

Universidad Autónoma de Barcelona

RESUMEN

El concilio de Trento y los concilios provinciales de 1565-1566 supusieron un punto de inflexión en el proceso de pérdida de las amplias prerrogativas medievales de los cabildos y de su sometimiento a la jurisdicción de los obispos. Pero estos concilios no supusieron una sujeción total del clero capitular. Los memoriales presentados por el cabildo de Plasencia con ocasión del concilio provincial de Salamanca en 1565-66 muestran sus esfuerzos jurídicos para salvaguardar un margen de autonomía que les permitiera contrapesar el poder de los obispos, acrecentado durante la Contrarreforma.

Palabras Clave: Cabildos, Obispos, concilio de Trento, concilio provincial compostelano, Plasencia.

ABSTRACT

The Council of Trent and the provincial councils of 1565-1566 marked a major change in the relationship between bishops and canons. It began the process of loss of the large medieval privileges of the councils and their subjection to the bishops. However, these councils did not lead to a total subjection of the canons. The requests filed by the chapter of Plasencia in the provincial council of Salamanca in 1565-66 show their efforts to safeguard a certain degree of autonomy from the power of bishops, increased during the Counter-Reformation.

Keywords: Cathedral Chapters, Bishops, Council of Trent, provincial council, Plasencia.

En 1788, cuando redactaba la historia de su diócesis, el canónigo de Osma Juan Loperráez no pudo dejar de escribir: “Les faltó a los cabildos en el concilio de Trento y

Provinciales que les siguieron diputados que hubieran defendido con rigor los derechos del verdadero Senado que representa cada uno con su cabeza, el Obispo”¹. A finales del siglo XVIII el clero catedralicio castellano todavía tenía la sensación de que el concilio de Trento había supuesto un punto de inflexión en el proceso de pérdida de las amplias prerrogativas medievales de los cabildos y de su sometimiento a la jurisdicción de los obispos. Como dice Loperráez, los cabildos no tuvieron voto ni en el concilio tridentino ni en los provinciales subsiguientes, en los que sólo votaron los obispos, pero no es menos cierto que los capitulares del siglo XVI desplegaron un variado arsenal de argumentos y maniobras jurídicas y políticas para intentar evitar el golpe que se les venía encima.

1 LOS CABILDOS DE LA CORONA DE CASTILLA Y EL CONCILIO DE TRENTO²

A mediados del siglo XVI, muchos reformadores católicos creían que para remediar la degradación del clero era necesario asentar un poder eclesiástico fuerte y una jerarquía clara y eficaz. Ese poder era el del obispo, que saldría claramente reforzado del concilio de Trento. El principal obstáculo para el ejercicio del poder episcopal era la exención jurisdiccional de los cabildos colegiales y catedralicios, que permitía a los canónigos actuar muchas veces como un contrapoder diocesano.

Así que cuando Paulo III reunió en 1545 el concilio de Trento, los obispos de la Corona de Castilla plantearon el tema. El Consejo de Castilla impidió a los cabildos enviar memoriales o un delegado a Trento. En 1547, la sesión VI del concilio (c. 4 de Ref.) autorizó a los obispos a visitar personalmente los cabildos exentos y a castigar las conductas incorrectas de sus miembros. Pero la Curia romana interpretaba el decreto de forma restrictiva: se excluía todo cabildo que estuviese exento del poder del obispo por su acta de fundación o desde tiempo inmemorial.

Tras la suspensión del concilio en 1548 y su reanudación en Trento en 1551, los obispos castellanos volvieron a la carga, pero la mayoría conciliar no aceptó su petición de derogar todas las exenciones. Finalmente el decreto de la Sesión XIV (c. 4 de Ref.) estableció que los obispos podían corregir y castigar a los clérigos seculares incluso fue-

1 J. Loperráez, *Descripción histórica del Obispado de Osma*, Madrid, 1978, v. I, p. 432.

2 Para un relato más detallado: I. Fernández Terricabras, “Conflictos entre Carlos V y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla (1552-1556)”, in J. Martínez Millán, ed., *Congreso Internacional Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558)*, Madrid, 2001, vol. II, p. 361-386. C. Gutiérrez, *Trento, un problema: la última convocatoria del Concilio (1552-1562)*, Madrid, 1995. J. Gil Sanjuán: “Lucha de los cabildos castellanos por su autonomía y libertad (1553-1555)”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna*, 7, 1994, p. 275-295, que resume *Los cabildos catedrales de Castilla ante la Reforma tridentina*, Madrid, 1973. F. Cereceda, “El litigio de los cabildos y su repercusión en las relaciones con Roma (1551-1556)”, *Razón y Fe* 130, 1944, p. 215-234. L. Serrano, “Anotación al tema: el Papa Paulo IV y España”, *Hispania*, 10, 1943, p. 293-325.

ra de la visita, siempre que lo hicieran personalmente, no por mediación de un vicario. No obstante, el canon precisaba que las exenciones perpetuas debían ser mantenidas y, además, muchos juristas interpretaban que la expresión clérigos seculares no incluía a los canónigos.

En 1552 se suspendió por segunda vez el concilio. Muchos obispos volvieron a sus sedes dispuestos a poner en práctica el decreto sobre la visita a los cabildos. Se amparaban en las órdenes de Carlos V y del príncipe Felipe de aplicar los cánones ya aprobados en Trento. Pero muchos cabildos se negaron a obedecer los mandatos de sus obispos y organizaron su resistencia a dos niveles: uno general y otro local.

En el plano general, varios cabildos de la corona de Castilla enviaron un procurador conjunto a Roma para obtener el apoyo de la Santa Sede. En varias ocasiones tanto Julio III como Paulo IV ordenaron a los obispos suspender sus actuaciones y confirmaron la exención jurisdiccional de los cabildos, pero sus órdenes no fueron obedecidas.

El choque entre la jurisdicción real, que estaba ordenando cumplir el concilio, y la jurisdicción pontificia, que mandaba lo contrario, era inevitable. Para el rey y los obispos, los cánones eran válidos desde el momento en que habían sido aprobados por el concilio, pero la Santa Sede mantenía que no podían ser aplicados hasta que el papa los hubiese confirmado, modificándolos si quería, y que el pontífice era la única instancia autorizada para dirimir las dudas sobre su interpretación. Al mismo tiempo, había un problema político: puesto que los obispos eran nombrados a presentación del rey, en Roma los cabildos eran vistos como la única instancia que podía contrapesar el control absoluto del clero secular por la Corona y permitir que la Santa Sede no quedase marginada de la gestión de la Iglesia castellana.

En el plano local, varios cabildos eludieron las visitas de los obispos o hicieron públicas, sin el plácet del rey, las órdenes que llegaban de Roma a su favor. En algunas diócesis hubo canónigos castigados con penas de cárcel o de destierro y otros huyeron de sus ciudades. Así en Segovia, Calahorra³, Burgos⁴, Pamplona⁵, Zamora, Astorga, León, Santo Domingo de la Calzada,...

En 1561, cuando Pío IV congregó de nuevo el concilio, los cabildos castellanos enviaron un agente que fue expulsado de Trento por orden de Felipe II. La Sesión XXV, si por un lado eliminó las exenciones de los cabildos, por otro limitaba la autoridad de los obispos: el obispo podía proceder contra los capitulares, en visita o fuera de ella, pero debería hacerlo siempre acompañado de dos adjuntos elegidos por el cabildo. Además, el concilio de Trento obligaba a los cabildos a gastar una tercera parte de sus ingresos en las distribuciones cotidianas (rentas a los canónigos y dignidades que efectivamente asistían

3 T. Marín Martínez: "Primeras repercusiones tridentinas: el litigio de los cabildos españoles. Su proceso en la diócesis de Calahorra", *Hispania Sacra*, 1, 1948, p. 325-349.

4 N. López Martínez: "El cardenal Mendoza y la Reforma Tridentina en Burgos", *Hispania Sacra*, 16, 1963, p. 61-137.

5 J. Goñi Gaztambide: "Los cabildos españoles y la confirmación del Concilio de Trento", *Annuario historiae conciliorum*, 1975, p. 425-458.

a los oficios). Imponía que todas las dignidades y al menos la mitad de los canónigos fuesen sacerdotes y graduados universitarios. Como norma general, los miembros del cabildo no podían ausentarse más de tres meses.

Los cabildos todavía intentaron evitar que Pío IV confirmase estos decretos, tratando de repetir la disputa que se produjo en 1552. La confirmación pontificia de los decretos y su recepción por Felipe II en 1564 les privaron de esta vía de resistencia. Pero los cabildos aún no habían rendido sus armas. Sabían que quedaba pendiente una tarea importante para desplegar los cánones conciliares y estaban dispuestos a dar la batalla para aminorar en la medida de lo posible sus efectos mediante interpretaciones favorables a sus intereses.

El primer paso de ese despliegue eran los concilios provinciales que en 1565 iban a concretar la aplicación del concilio de Trento en cada provincia eclesiástica. En la Corona de Castilla, tuvieron lugar concilios de las provincias de Toledo, Granada y Santiago con la asistencia de enviados del rey que controlaron hasta el más mínimo detalle⁶. Estos delegados regios fueron advertidos de que debían impedir todos los intentos de los cabildos de cambiar los decretos o incluso de impedir su ejecución. Si los capitulares planteaban dudas sobre la interpretación de los cánones, estas debían ser enviadas a la Corte para que el rey decidiera si podían ser cursadas a Roma o no. Por otra parte sólo los obispos debían tener voz y voto en los concilios; los representantes de los cabildos serían oídos, pero no podrían participar en las votaciones.

En cuanto a los decretos del concilio, el rey ordenaba que se respetasen inquebrantablemente el mandato de que las dignidades y la mitad de los canonicatos tuviesen grados universitarios, la prohibición de acumular beneficios curados, que a partir de ahora exigían residencia, y la provisión de las canonjías de oficio por edicto y oposición con votos del obispo y del cabildo. Pero en el caso de la visita de los cabildos, el rey temía que la presencia de dos jueces capitulares originase pleitos, por lo que los obispos deberían dar su opinión a la Corte sin legislar sobre el particular⁷.

2 EL CABILDO DE PLASENCIA Y EL CONCILIO PROVINCIAL COMPOSTELANO DE 1565-66

2.1 Antes del concilio provincial: las peticiones del cabildo

Sería demasiado largo exponer aquí las actitudes y las maniobras de los diversos cabildos para defender sus intereses durante los concilios provinciales de 1565-6. Nos vamos a centrar en uno que puede ser ejemplar: el de la diócesis extremeña de Plasencia. No consta que el cabildo de Plasencia fuese de los más diligentes mientras duró el

6 I. Fernández Terricabras, *Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de Trento*, Madrid, 2000, p. 123-147 y 312-330.

7 Archivo General de Simancas, Patronato Real, 22, n. 1 y 4.

concilio de Trento, pero una vez acabado, sí se distinguió como uno de los más activos para evitar sus efectos.

Era obispo de Plasencia desde 1560 el aristócrata andaluz y reputado canonista Pedro Ponce de León (1510-1573). Formado en la Universidad de Salamanca, Ponce conocía bien las interioridades de los cabildos, pues había sido canónigo de Córdoba, pero también había estado en Trento entre 1551 y 1552 como obispo de Ciudad Rodrigo.

La diócesis de Plasencia formaba parte de la provincia eclesiástica compostelana. El arzobispo de Santiago, Gaspar de Zúñiga, convocó el concilio provincial en la ciudad de Salamanca, juzgada más capaz y de más fácil acceso para todos los preladados de la provincia.

Al tener noticia de la convocatoria del concilio provincial, el cabildo redactó un largo memorial de peticiones⁸, que mostraba bien la intención de los cabildos de difundir dudas sobre los decretos tridentinos y de obtener revisiones favorables a sus intereses. En concreto, el cabildo de Plasencia solicitó que en el concilio provincial se aprobasen las siguientes medidas:

- 1- Pedir al Papa que modere el canon que obliga a tener un beneficio con el que mantenerse para poder ser ordenado (Ses. XXI, c.2 de Ref.), a fin de que los mozos de coro puedan ser ordenados presbíteros para ejercer como capellanes de la catedral sin necesidad de convertir dichas capellanías en colativas y perpetuas.
- 2- Que un juez nombrado por el concilio provincial tome juicio de residencia a los provisores y demás oficiales de los obispos, “porque por manifiesta y notoria expirienzia se vee las extorsiones y agravios e injusticias que hazen”. Por el mismo motivo, los provisores, visitadores y fiscales del obispo no deberían ejercer su oficio más de dos o tres años.
- 3- Se debe excomulgar a los obispos o a sus oficiales que ordenan encarcelar o agravan las condiciones de prisión a los clérigos para forzarlos a que consientan en sus sentencias aunque sean injustas y para evitar que presenten apelaciones.
- 4- Que se respeten los antiguos cánones y el concilio de Trento (Ses. XIII c. 1 de Ref.) para que los clérigos que por orden de un juez sufran agravios con perjuicio irreparable, como tortura, prisión o cualquier otra decisión injusta, puedan apelar antes de la definitiva y que un juez diputado por el concilio provincial conozca dicha apelación.
- 5- De la misma manera, uno de dichos jueces conciliares debe poder conocer si es justa la apelación en los casos en que el concilio de Trento ordena que el obispo proceda a ejecución de la sentencia a pesar de que haya apelaciones (como Ses. XXIV, c. 20; Ses. XXV, c. 14) para evitar daños irreparables.
- 6- Que se prohíba que los obispos apliquen las penas pecuniarias a los clérigos en beneficio de su cámara, porque los oficiales de los obispos condenan a penas exorbitantes para obtener más dinero. Un depositario supervisado por el obispo o su vicario y por el cabildo aplicaría el importe de dichas penas a los pobres o a alguna obra pía.

8 Transcrito por E. Rodríguez Amaya, “El Concilio Provincial de Salamanca de 1565 y sus repercusiones en Plasencia”, *Revista de Estudios Extremeños*, VII, 1951, p. 253-268.

- 7- Que los obispos no puedan hacerse con la herencia de los clérigos muertos.
- 8- Que los vicarios, visitadores y fiscales de los obispos sean al menos licenciados en Teología o Cánones, para que, por evitar pagarles un buen salario, los obispos nombren a quien “por su inscicia e ydiotez haze grandes agravios”.
- 9- Que los obispos castiguen secretamente los crímenes y pecados secretos, en los que no ha habido infamia pública, como mandan el evangelio y el derecho natural. “Oy día las audiencias obispales son buytrera y carnicería de la fama y honor asy de clerigos principalmente como de legos”.
- 10- Que las personas ausentes de la sede de la diócesis no sean citadas y forzadas a comparecer con mucho trabajo y gasto por causas leves, que se acaban con penas irrelevantes.
- 11- En el pasado, la Santa Sede autorizó que los capitulares de Plasencia no residiesen más de seis meses al año por el excesivo calor que hace en verano y no se ha perjudicado el culto, pues los oficios siempre han sido bien celebrados. El concilio de Trento, cuando trata de las distribuciones cotidianas (Ses XXIV c. 12) no deroga los privilegios e indultos concedidos por la Santa Sede, con lo cual las bulas sobre la residencia de los capitulares de Plasencia deben continuar en vigor. El concilio provincial debe evitar que en los meses “de huelga” los capitulares pierdan tanta parte de sus rentas como sucede ahora, en que el obispo les ha agraviado con unas tasaciones y unas distribuciones injustas.
- 12- Cuando el obispo celebra órdenes o administra un sacramento, llama a los capitulares que él quiere para que le asistan. Este nombramiento debe corresponder libremente al cabildo, pues el concilio de Trento no lo concede al prelado. Si el sacramento es administrado fuera de la capital de la diócesis, los capitulares no estarán obligados a asistirle.
- 13- Que todos los cabildos tengan una “carcel decente” propia y que el concilio establezca, conforme a Trento (Ses. XXV c. 6), cuáles son los delitos en que “el capitular delincuente no merezca carcel honesta y decente sino la publica”.
- 14- Que el capitular encarcelado no pierda su residencia, su derecho a voto ni sus distribuciones para evitar que los obispos los tengan presos para presionarlos en caso de votación.
- 15- Que los seis examinadores que según el concilio de Trento (Ses. XXIV c. 18) deben ser nombrados en cada diócesis para examinar los candidatos a beneficios sean nombrados dos por el obispo, dos por el sínodo y dos por el cabildo y que todos ellos cobren un salario digno pagado por el obispo.
- 16- Que se declare el derecho a voto en el concilio de todo los que tienen voto en el sínodo diocesano, como son los arcedianos, los arciprestes y otras dignidades con cura. Y que también tengan voto en los concilios los diputados de los cabildos catedralicios⁹.
- 17- Que se aclare que el concilio de Trento (Ses. XXV c. 6) no otorga la presidencia del cabildo en el coro al obispo, sino que ésta siempre ha correspondido al deán o al más an-

9 Obsérvese que si esto se aceptaba, los cabildos tendrían la mayoría en el concilio provincial.

tiguo de los capitulares. Lo que les concede es sólo el primer asiento y el derecho a hablar primero en los debates.

18- Trento (Ses. XXV c. 10) deja indistintamente al concilio provincial o al sínodo diocesano el nombramiento de los jueces delegados de cada diócesis. Se suplica que sea el concilio provincial quien lo decida, pues en el sínodo diocesano sólo se hace lo que quiere el obispo. En el caso de que los sínodos diocesanos tuvieran que nombrar jueces o examinadores, deberían hacerlo por votación secreta.

19- Que se pida al papa que revoque todos los privilegios para no pagar diezmos.

20- Que los jueces y notarios episcopales se limiten a cobrar los derechos que marque el arancel real.

21- En los procesos en que hay muchos culpables, los fiscales y notarios incoan un proceso por cada inculcado, para así cobrar más derechos. En esos casos, que sólo se forme un proceso y las costas se repartan entre todos los procesados.

22- Que si un procesado es absuelto por el juez, no se le pueda condenar a pagar las costas de notarios y procuradores.

23- Que se cumpla lo ordenado por el concilio de Trento (Ses. XXIV c. 1 de Ref.) para que en el concilio provincial se establezca la forma que ha de tener la investigación sobre los candidatos a obispos y que se envíe al papa para su aprobación.

24- Como muchas veces no se dicen los oficios divinos a sus horas porque el cabildo está esperando a que llegue el prelado, se mande que misas y oficios se digan a su tiempo sin aguardar al obispo.

25- Que se suplique al rey que sus consejos y oficiales de justicia respeten las exenciones y libertades eclesiásticas y que los clérigos no sean presos ni castigados por jueces seculares.

26- Que se pida al rey que en sus consejos haya consejeros teólogos, pues en ellos se tratan temas que afectan a la conciencia sobre los que los juristas no pueden asesorar bien al monarca.

27- Que se prohíba que un capitular pueda ser provisor, vicario u oficial del obispo para evitar que revelen los secretos del cabildo al prelado.

28- Cuando un preso por orden del obispo presente al superior una apelación y obtenga una mejora de sus condiciones, que se obedezca la orden del superior inmediatamente sin esperar un segundo mandato.

29- Trento manda que las rentas de los préstamos y beneficios simples que vaquen se apliquen a la fundación de un seminario, pero los obispos no lo cumplen para poder proveerlos a sus criados y parientes y sólo lo respetan cuando se trata de vejar a los cabildos y al clero.

En suma, el cabildo de Plasencia no ocultaba su ambición. Planteaba temas que habían sido expresamente excluidos de los debates conciliares por orden del rey, como las condiciones que habían de tener los candidatos a obispos (23), las relaciones entre la justicia secular y la eclesiástica (25, 26) o las personas que debían tener voto decisivo en el concilio provincial (16). Pero está claro que el principal objetivo del cabildo de Plasencia era restringir la jurisdicción del obispo sobre los capitulares en particular y sobre el clero

en general, ya fuese limitando sus poderes o los de sus oficiales con diversas normas (3, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22); ya fuese imponiendo mecanismos de control, como el juicio de residencia (2, 6); ya fuese, sobre todo, garantizando el derecho de los procesados en los tribunales episcopales a elevar apelaciones a instancias superiores, lo que incluía, aunque no se nombre, a la Santa Sede (4, 5, 28). En ese sentido, es evidente el peso de lo sucedido entre la segunda y la tercera etapas del concilio de Trento. El poder del obispo sobre el cabildo también debía ser limitado en lo relativo a las reuniones del coro y al reparto de las distribuciones (11, 17), al culto (12, 24), a los nombramientos eclesiásticos en la diócesis (8, 15, 18, 27) o incluso a las uniones de beneficios a los nuevos seminarios (29).

Los canónigos eran hábiles argumentadores. No presentaban sus peticiones como la defensa de unos privilegios que podían considerarse desmedidos. Al leer el memorial, aparecían como los defensores de unos mecanismos de justicia que evitasen los abusos y las coacciones que continuamente cometían los oficiales de los obispos contra todos los clérigos. La idea de que los eclesiásticos e incluso los laicos, en particular los más pobres, eran continuamente extorsionados por la justicia episcopal se repetía constantemente (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 28) y permitía al cabildo erigirse en el portavoz de las reivindicaciones del clero diocesano frente al obispo. Se diría que eran ellos los que defendían la reforma de la Iglesia, “pues oy día, lo que es de gran lastima, los obispos comunmente se exoneran del gobierno spiritual y temporal de sus ovejas remitiendolo todo lo mas a sus oficiales moços y sin letras ni experiencia”.

2.2 Después del concilio provincial. Las apelaciones del cabildo

El concilio provincial compostelano tuvo lugar en Salamanca entre el 8 de septiembre de 1565 y el 27 de abril de 1566 bajo el atento control del delegado del rey, el conde de Monteagudo, Francisco Hurtado de Mendoza. Los decretos fueron promulgados en tres solemnes sesiones, llamadas “acciones”. Siguiendo las instrucciones del rey, sólo tuvieron voz y voto los obispos y los cánones fueron enviados a la Corte para que el rey los aceptara antes de su solemne aprobación en el concilio. En esas condiciones, no es de extrañar que las peticiones de los capitulares de Plasencia o de otros cabildos fueran orilladas y que, al contrario, las constituciones provinciales reforzasen el poder de los obispos.

Por eso, en muchas diócesis los cabildos catedralicios se negaron a aceptar los decretos provinciales, alegando que se había dictaminado sobre ellos sin su consentimiento. Los cabildos presentaron sus apelaciones al papa lo que provocó un nuevo conflicto con los prelados. Pero Felipe II no estaba dispuesto a que se repitiesen los largos disturbios de los años 50. En junio de 1566 advirtió a todos los cabildos y obispos que los concilios provinciales debían ser cumplidos. Si se sentían agraviados, no debían formar pleitos en Roma, sino enviarle a él una relación de sus argumentos¹⁰.

10 Biblioteca Nacional, Ms. 13040, p. 7.

El obispo de Plasencia, famoso por sus conocimientos de Derecho Canónico pero también por sus pleitos contra el cabildo ante el Consejo de Castilla, aprovechó la ocasión para presentar al rey un tratado impreso en nombre de todos los obispos de la provincia eclesiástica. Ponce de León desautorizaba las apelaciones de los cabildos contra el concilio compostelano y solicitaba que el Consejo prohibiese aplicar los mandatos que pudieran llegar de Roma a favor de los cabildos. Para el obispo, el concilio provincial, en tanto que reunión legítima de obispos asistidos por el Espíritu Santo, no podía ser recusado ante ninguna instancia. La jurisdicción del obispo era un principio de derecho divino y humano al que los cabildos no se podían oponer. Los capitulares, en fin, no buscaban más que esquivar la autoridad episcopal aspirando a prerrogativas que no les pertenecían.

El cabildo de Plasencia reaccionó encargando a su abogado, el bachiller Villoldo de Almaraz, un detallado memorial de 88 folios para responder al obispo, que fue dirigido al rey el 28 de junio de 1567¹¹.

La intención de Almaraz era demostrar, con abundantes citas de juristas y de concilios, que las dudas y las apelaciones del cabildo estaban fundadas en derecho y que, mientras se dirimían, no se podían aplicar los decretos provinciales. Para Almaraz estaba claro que se podía apelar contra las leyes de todas las instancias que reconocen un superior, como eran los obispos respecto al papa. Además, ningún concilio podía tener validez hasta ser aprobado y ratificado por la Santa Sede, que podía revocar aquellos artículos que considerase contrarios al derecho canónico o que agraviasen a alguien.

Ponce de León, movido por “el odio y aborrecimiento que tiene con sus capitulares” (p. 46), había intentado desprestigiar al cabildo ante el rey. Pero, en realidad, los obispos realmente se movían por su propio interés y no por el buen gobierno del clero, por lo que era necesario que el monarca reprimiera los agravios que diariamente hacían a sus cabildos y al clero, incluido el de impedirles las apelaciones ante la Santa Sede. En cambio, los capitulares en modo alguno querían fomentar el odio y la enemistad con el obispo, ni atribuirse competencias que no eran suyas, pues el cabildo de Plasencia nunca había negado la obediencia al prelado. En suma,

“querer fundar el obispo que en solo el a de estar e residir toda la jurisdiccion, auctoridad, preeminencia y presidencia y que en los demas Miembros no se a de derivar cosa alguna de lo susodicho es contra derecho y razon natural, pues si asi huviese de ser seria cosa imposible poderse sustentar el servicio, orden y buen gobierno de las iglesias, porque los obispos casi nunca estan en ellas, ni pueden ver ni entender ni proveer todo lo que es necesario”.

Por eso, si realmente a los obispos les moviese el celo por el buen gobierno, no intentarían quitar a los demás sus derechos, sino delegar sus funciones para mayor tranquilidad de sus conciencias y mejor servicio de las iglesias. El cabildo, por su parte, sólo

11 Biblioteca Nacional, Ms. 13321.

contradecía a su prelado cuando les mandaba “cosas injustas e yllícitas” que los capitulares no estaban obligados a obedecer.

En la segunda parte de su texto, Villoldo de Almaraz enumeraba los decretos del concilio provincial compostelano contra los que el cabildo de Plasencia había apelado. Presentamos primero el contenido de cada decreto impugnado y, acto seguido, los argumentos del cabildo.

1- Acción 2, decreto 3: Restringe el plazo de los patronos de beneficios para presentar sus provisiones durante las vacantes.

Según Almaraz, se priva a los patronos de unos plazos y derechos que les concede el Derecho Canónico y que el concilio de Trento no ha derogado. La medida puede ser dañina, pues por falta de tiempo para buscar el candidato idóneo, se acabará designando a malos beneficiados.

2- Acc. 2, dec. 7: Que no se puedan hacer reuniones extraordinarias del cabildo durante las horas canónicas, salvo una por semana, y que quienes asistan no cobren las distribuciones cotidianas.

Pueden darse muchas ocasiones en que sea necesario reunir capítulo con celeridad aunque sea durante los oficios divinos. Por otra parte, los obispos no debieran limitar las reuniones de los cabildos, ya que priva a los canónigos de su derecho de defensa, puesto que “los mas de los negocios que los cabildos tienen son con sus prelados”. El derecho canónico establece que los capitulares ganen los frutos y distribuciones de sus prebendas siempre que estén ocupados en cosas útiles para su iglesia y cuando estén presentes.

3- Acc. 2, dec. 9 y 10: Que las representaciones y procesiones de Navidad y de Corpus Christi sean reguladas por el obispo o por su vicario.

En ausencia del prelado, esta facultad corresponde al deán o a la dignidad más antigua del cabildo, no al vicario del obispo. De acuerdo con los cánones, el vicario sólo reemplaza al obispo en materias de jurisdicción, no de orden. Por eso, el concilio de Trento (Ses. XXV c. 6 de Ref.) prohíbe claramente lo que ahora los obispos conceden a sus vicarios.

4- Acc. 2, dec. 15: Que en las catedrales haya maestro de ceremonias, a costa del cabildo, del obispo y de la fábrica; no se le puede despedir sin la aprobación del obispo, que es quien fijará su salario.

No hay ninguna necesidad de este cargo en Plasencia, donde siempre ha habido buen orden ceremonial. Pero si se implantara un maestro de ceremonias, el cabildo no está obligado a costear su salario y menos sin poderlo despedir. El concilio provincial no puede disponer de las haciendas de los capitulares en perjuicio suyo.

5- Acc. 2, dec. 16: Durante el culto, cuando los beneficiados de las catedrales hayan entrado en el coro, no puedan salir de él sin licencia del presidente, que sólo la dará “por causa de celebrar o de necesidad corporal” (p. 38).

Puede haber otras causas espirituales y piadosas justas y necesarias para ausentarse del coro, que deberían someterse al arbitrio del presidente.

6- Acc. 2, dec. 17: En los maitines de Navidad y Pascua y en las procesiones de Corpus Christi y del Domingo de Ramos, todas las rentas se han de ganar por distribuciones cotidianas y no las ganen los que estén enfermos.

Si el concilio de Trento ya ha ordenado que los obispos hagan el reparto en distribuciones cotidianas de una tercera parte de las rentas del cabildo, el concilio provincial no puede hacer un nuevo reparto. Por otro lado, los cánones consideran justificada la ausencia por enfermedad y permiten al canónigo enfermo ganar las distribuciones como si estuviera presente. No hay razón, como pretende el obispo, para presumir que los capitulares se fingen enfermos para no asistir.

7- Acc. 2, dec. 18: Que cada sábado se repartan en el cabildo las funciones de los diferentes oficios y que cada cual haga las que le toquen sin poderlas delegar salvo en caso de enfermedad; quien no cumpla con su oficio, perderá las distribuciones de la semana y, si reincide, será castigado por el obispo.

Existen más causas justas que la enfermedad para no poder ejercer un oficio. Bastaría con castigar con la pérdida de la distribución del oficio afectado, no de toda la semana. Además, el concilio de Trento ha renovado las constituciones que establecen que sólo se pierdan las horas no resididas. En fin, el castigo debiera ser competencia del deán y del cabildo.

8- Acc. 2, dec. 19: Cuando se celebren los oficios divinos, las dignidades, canónigos y beneficiados de la iglesia no pueden estar en el claustro ni en otra capilla, so pena de perder todas las distribuciones de aquel día.

Se ofrecen a menudo causas justificadas para estar en el claustro o en capillas alejadas del coro. Y, en todo caso, el inculcado debería perder sólo la distribución de la hora divina correspondiente, no de todo el día.

9- Acc. 2, dec. 20: Quien no quiera cantar o callar en el coro cuando deba, sea castigado por el presidente; pero si continúa desobedeciendo, que le castigue el obispo.

El castigo debe corresponder siempre al deán o a quien presida el coro.

10- Acc. 2, dec. 22: Los beneficiados están obligados a oír el sermón de la misa dominical y, si no, pierden las distribuciones de la misa. Quienes se ausenten por negocios comunes no pueden ser considerados presentes.

Nunca se hizo un decreto obligando a oír el sermón, ni siquiera para los laicos. El concilio de Trento no ordena con penas a los laicos que oigan el sermón, sino a los obispos que lo prediquen. En fin, las normas del cabildo sólo obligan al clero a oír misa entera y el sermón no es parte necesaria de la misa.

11- Acc. 2, dec. 27: El contador, que es el responsable de controlar la asistencia de los capitulares al coro, no puede ser lego, sino clérigo y no puede ser despedido sin justa causa. Debe jurar su oficio ante el obispo o su vicario.

El oficio de contador lo provee y paga el cabildo sin participación del obispo, por lo que los obispos no pueden intervenir sobre él.

12- Acc. 2, dec. 28: El coro lo preside el sacerdote, aunque sea menos antiguo en el cargo, antes que quien no sea sacerdote.

La presidencia del coro va anexa a la dignidad y a la antigüedad; que quien es menos antiguo preceda a quien lo es más es contrario a la razón y al buen orden del gobierno. Pero, además, no compete a los obispos decidir sobre la presidencia del coro. Y como el concilio de Trento (Ses. XXIV c. 12) manda que se ordenen sacerdotes los titulares de las dignidades que tienen cura de almas aneja, pero no de las otras, como son las de Plasencia, el concilio provincial no puede obligarles a ordenarse.

13- Acc. 2, dec. 34: En la provisión de las canonjías de oficio, que según el concilio de Trento debe ser hecha por edicto y oposición, sólo se dispondrá de 15 días para fijar los edictos; y tan sólo el obispo o su vicario pueden inhabilitar a un opositor por infamia.

Esta norma impediría opositar a hombres dignos y beneméritos. Además, siendo el cabildo juez de la provisión de las canonjías, no se le puede privar del conocimiento de las causas de inhabilitación, en las cuales el obispo no tiene más que un voto, al igual que cada canónigo. Pero, sobre todo, si estuviese en manos de los obispos “inhabilitar a quien quisieren, está claro que fácilmente se harían señores y proveedores de las dichas canonjías”. Este decreto deroga el concilio de Trento (Ses. XXV c. 5), que manda respetar lo estatuido en las fundaciones de las canonjías.

14- Acc. 2, dec. 35: El canónigo doctoral, además de ejercer sus funciones, ha de ayudar, aconsejar, abogar e informar gratis, oralmente y por escrito, en los asuntos de la dignidad episcopal.

Esta nueva carga del doctoral no está prevista ni en su acta de fundación, ni en los estatutos de la catedral, ni en el concilio de Trento. Dado que el cabildo y el obispo tienen sus haciendas distintas, el doctoral sólo debe actuar como abogado del cabildo, máxime cuando puede haber casos de colisión de intereses.

15- Acc. 2, dec. 36: El obispo puede señalar al canónigo lectoral el tema de sus lecciones y la fecha, así como mandar a los beneficiados que oigan esas lecciones.

El concilio de Trento (Ses. V c. 1 de Ref.) manda que el obispo y el cabildo provean la canonjía lectoral y, por lo tanto, juntos deberían decidir todo lo relativo a esta prebenda.

16- Acc. 2, dec. 39: Se conceden exenciones a los canónigos magistral y doctoral por cada sermón pronunciado o por cada cuestión respondida.

Con esta medida, se defrauda la residencia y la asistencia a los divinos oficios.

17- Acc. 2, dec. 40 y 41: Se regulan las licencias de estudios y otras que se pueden dar en los cabildos.

En Plasencia y en otras diócesis es costumbre inmemorial con fuerza de ley que estas licencias las dé el cabildo. Trento (Ses. XXV c. 6) les confirma ese derecho, pues el concilio ecuménico no priva a los cabildos de sus costumbres salvo en los casos expresamente derogados. Como el decreto de la Ses. XXIII c. 1 manda que los obispos aprueben las licencias que haya dado el cabildo, si se presume fraude bastará con que el obispo no apruebe la licencia.

18- Acc. 3, dec. 14: El obispo, con el parecer de cuatro beneficiados de la catedral, habrá de ordenar e imprimir los estatutos y costumbres que se han de guardar en ella, y los que no estén incluidos se tendrán por derogados.

El gobierno de la mesa capitular pertenece *in solidum* al cabildo, sin que el prelado pueda entrometerse en su administración. Es obvio que los prelados aprovecharán la redacción de estos estatutos para, como han hecho en el concilio provincial, decretarlo todo a su favor y en contra de los cabildos.

19- Acc. 3, dec. 19: Los visitadores y provisos sean visitados y durante la visita sean suspendidos durante treinta días.

Es necesario que realmente se haga juicio de residencia a todos los provisos y oficiales y que nadie puede ser reelegido sin haberlo pasado. Si a los oficiales sólo se les suspende un mes y luego se les restituye en el oficio, nadie osará declarar contra ellos.

20- Acc. 3, dec. 21: El obispo o un comisionado suyo debe mandar y proveer las obras que se hagan en las catedrales.

Esta prerrogativa pertenece al deán y al cabildo. Los obispos no pueden ampararse en el concilio de Trento, pues la Ses. XXII c. 9 sólo les concede la supervisión de las cuentas de las fábricas de las iglesias, pero no su administración.

21- Acc. 3, dec. 33: Al ir vacando las dignidades y la mitad de las canonjías, se han de proveer en graduados en Teología o en Derecho Canónico.

En la catedral de Plasencia está vigente un estatuto confirmado por la Santa Sede para que las prebendas sean conferidas a los beneficiados y servidores de la iglesia y a los naturales de la ciudad y obispado en cierta forma y orden. El concilio de Trento no ha derogado este estatuto (Ses. XXV c. 5), pues manda respetar las fundaciones y otras constituciones de las prebendas. Si dicho estatuto no se guardase, los servidores de la iglesia perderían toda esperanza de promoción y no se hallarían tantos servidores ni tan instruidos como los hay en la actualidad. El concilio de Trento (Ses. XXIV c. 12) no manda que la mitad de los canónigos sean graduados universitarios, sino sólo lo “amonesta y que aquello sea adonde commodamente se pudiere hazer”, lo que no es el caso de Plasencia. En dicha ciudad no es posible que sean letrados la mayoría de los clérigos, pues no todos tienen los recursos suficientes para ir a las universidades y graduarse. Además, las catedrales no necesitan sólo letrados, sino personas hábiles y suficientes en el canto y en las ceremonias de la iglesia.

22- Acc. 3, dec. 35: Que cada primer lunes de mes haya cabildo espiritual para cosas relativas a los oficios divinos, y que a éste y a los demás deba asistir el obispo.

El cabildo se ve agraviado si en materias que no son espirituales se manda al obispo estar presente en las reuniones; él no tiene prebenda, ni voto, ni hacienda en la mesa capitular. El concilio de Trento (Ses. XXV c. 6 de Ref.) ya ha regulado las causas por las que los obispos pueden asistir al capítulo.

En resumidas cuentas, se desprende claramente del texto analizado que los obispos intentaron aprovechar la reunión del concilio provincial para mejorar su control sobre los cabildos. Pero también se nota que la estrategia del clero capitular consistía en promover todo tipo de dudas y confusiones tanto sobre el concilio de Trento como sobre el provincial, de manera que, de sus textos, surgía la imagen de un concilio prácticamente inaplicable, que debía ser corregido. El principio recurrente de la argumentación de Almaraz

era que el concilio provincial no podía ir más allá de lo que ya había mandado el concilio de Trento ni podía abrogar lo que estaba mandado por el Derecho Canónico. Advertía explícitamente que la intención del cabildo no era derogar el concilio de Trento, sino que el papa declarase cómo debían ser interpretados “algunos decretos oscuros”.

Más allá de cada decreto discutido, el conjunto del texto remite a la relación entre el obispo y el cabildo, que debían ser considerados como dos entidades iguales y contrapesadas. Villoldo de Almaraz insiste varias veces en que el cabildo de Plasencia no pretendía quitar al obispo su autoridad y que con su jurisdicción ordinaria le bastaba al obispo para castigar los abusos. En cambio, en las constituciones provinciales los obispos procuraban adquirir más competencias de las que les correspondían a expensas de sus legítimos poseedores, cuando lo que convenía al servicio de Dios, de la Iglesia y del rey era “que las iglesias e cabildos tengan ser y autoridad para que los prelados no se metan en todo ni tengan mano para disponer de los bienes de las iglesias” (p. 68). En particular, el prelado no podía valerse de los decretos tridentinos para visitar la catedral, porque el cabildo de Plasencia estaba exento de la jurisdicción del obispo y el concilio de Trento no sólo no había derogado los derechos ni las costumbres de los cabildos exentos, sino que los había confirmado.

2.3 La concordia del nuncio

Felipe II recibió los memoriales de los cabildos y de los obispos, incluidos los de Plasencia, y, con la intención de evitar los pleitos interminables en Roma, los envió al nuncio del papa ante su Corte, a la sazón Giambattista Castagna. Castagna no sólo era un reputado canonista, doctorado en Bolonia, sino que había participado en el último periodo del concilio de Trento como arzobispo de Rossano. El nuncio recibió el encargo del rey de estudiar las peticiones de los cabildos y de los obispos junto con el Dr. Velasco, consejero de Castilla y principal asesor del monarca en materias eclesiásticas. Tras casi un año de negociaciones, ambos personajes concluyeron dos “concordias”, una relativa al concilio provincial toledano y la otra al compostelano, aunque de contenido muy similar.

El 12 de julio de 1567, las concordias fueron remitidas a los cabildos y a los obispos para que diesen su parecer. Pero en su carta, el monarca es rotundo:

“porque entendemos ser esto lo que conviene al servicio de Dios nuestro Señor y bien de las iglesias y a la paz y concordia y buena conformidad que entre los Prelados y los Cabildos debe haber os encargamos que vos lo acepteis, cumplais y guardéis de la manera que aquí se dize y el Nuncio os lo escribe”¹².

Evidentemente, todos los destinatarios entendieron que se trataba de una orden del rey, así que, de mejor o peor grado, aceptaron las concordias¹³.

12 Biblioteca Nacional, Ms. 13040, p. 13.

13 I. Fernández Terricabras, *Felipe II...*, *Op. cit.*, p. 325-327.

Entre las respuestas más desfavorables, destacó la del obispo de Plasencia, Pedro Ponce de León, firmada en Trujillo el 20 de julio de 1567¹⁴. En su carta al rey, Ponce aceptaba el texto por ser lo que más convenía al servicio de Dios, por haberlo pedido el rey, por evitar los pleitos con los cabildos y por haberlo acordado dos personajes tan sabios como el nuncio y Velasco, “aunque yo, el menor de los prelados, e sido uno de los desta provincia con quien mas pleito ha tenido e tiene un cabildo (...) y el que mas e defendido por escripto los decretos del concilio”.

Aún así, Ponce no dejaba de dar su opinión sobre los distintos puntos de la concordia relativa al concilio compostelano, que enumeramos exponiendo primero el contenido de cada decisión del nuncio y, a continuación, las reservas del obispo de Plasencia cuando las hay.

1- cualquier decreto en el que se hable de la pena y castigo de los capitulares de cabildos exentos debe ser entendido según la disposición del concilio de Trento Ses. XXV c. 6.

Dicho canon tridentino sólo afecta a las causas criminales contra dignidades y capitulares de cabildos exentos, mientras que el concilio provincial se refiere a las causas civiles.

2- Acc. 2, dec. 7: los capitulares podrán hacer reuniones extraordinarias del capítulo por causa de la necesidad o utilidad de la iglesia.

En esos casos, la necesidad o utilidad de la iglesia debe ser declarada por el obispo o su provisor, pues si no, los cabildos aprovechan las reuniones del capítulo para ganar la residencia y las distribuciones cotidianas sin asistir a los oficios.

3- Acc. 2, dec. 9 y 10: la regulación de las procesiones dependerá del obispo si está presente; si está ausente, no se transfiere ese poder al vicario del obispo, sino que es el cabildo quien decidirá según la costumbre.

Esta precisión debería entenderse sólo en aquellos casos en que el cabildo es exento o tiene jurisdicción compartida con el obispo. Pero en los demás casos, en ausencia del obispo debe poder decidir el vicario

4- Acc. 2, dec. 17: la norma sobre las distribuciones de ciertos días debe ser aplicada si el total de las distribuciones del cabildo no excede la tercera parte de todos los frutos del cabildo. En caso de ausencia por enfermedad debidamente probada con un certificado jurado de un médico, no se perderán las distribuciones de esos días.

Que se precise si la probanza de la enfermedad debe ser hecha ante el obispo y, en su ausencia, ante el vicario general en el caso de los cabildos exentos. También que se precise quién debe nombrar a los médicos que certificarán la enfermedad, sugiriendo que lo haga el obispo.

5- Acc. 2, dec. 18: la norma sobre el ejercicio de los oficios semanales no excluye que por justa y razonable causa se pueda sustituir a alguien.

Si el obispo está en la ciudad, debería ser él quien juzgue si la causa es justa y razonable y en su ausencia, si el cabildo es exento, lo haga el vicario general.

14 Archivo General de Simancas, Patronato Real, 22, nº 59.

6- Acc. 2, dec. 27: el contador del coro sí podrá mostrar o leer a otras personas su registro, pero sólo en el archivo donde debe guardarlo, sin sacarlo de él. No debe entenderse que este decreto convierte el cargo en perpetuo, sino que será por dos años que no se podrán renovar consecutivamente. Y donde dice que debe ser clérigo, debe entenderse clérigo ordenado *in sacris*.

7- Acc. 2, dec. 28: el mandato de que quien sea sacerdote presida el coro debe entenderse sólo entre pares, es decir, que entre las dignidades presidirá primero quien sea sacerdote y que, si están ausentes todas las dignidades, presidirá el canónigo que sea sacerdote.

Que se precise que esto no anula el canon primero sobre edad y calidad de los capitulares.

8- Acc. 2, dec. 34: el obispo deberá proceder junto con el cabildo para inhabilitar a los candidatos a las canonjías de oficio allí donde exista esa costumbre.

Puesto que la inhabilitación de opositores es un acto de jurisdicción coercitiva y no de jurisdicción voluntaria, se declare que los cabildos sólo decidirán sobre el tema junto al obispo o su vicario cuando dispongan de la jurisdicción coercitiva.

9- Acc. 2, dec. 36: cuando el obispo asigne tema, lugar y hora de la lección al canónigo lectoral, debe hacerlo al menos con el consejo del cabildo.

10- Acc. 2, dec. 40 y 41: los cabildos conservan la facultad de conceder licencias de estudios a los capitulares en las catedrales donde exista costumbre antigua de que se haga así.

Que se especifique que los cabildos ya no pueden conceder licencias de estudios por sí solos, sin aprobación de los obispos.

11- Acc. 3, dec. 14: para redactar el libro de estatutos y costumbres de la iglesia y derogar las que no queden incluidas en él, el obispo deberá actuar con el consenso de las cuatro personas elegidas por el cabildo.

Debiera señalarse expresamente que, si el cabildo no es exento, no será necesario el consentimiento de los cuatro capitulares. Y aunque el cabildo sea exento, el obispo puede por vía de visita revisar sus estatutos y costumbres y cambiarlos de acuerdo con el concilio de Trento (Ses. VI, c. 4; Ses. XXV, c. 6) sin los cuatro capitulares. Y en cuanto a los estatutos y costumbres que no están aprobados ni por el obispo ni por la Santa Sede, el obispo puede modificarlos incluso fuera de la visita aun cuando el cabildo sea exento, pues esos estatutos son nulos. En el caso de los cabildos exentos con estatutos aprobados, el obispo debiera poder cambiarlos tras discutir con los cuatro capitulares.

12- Acc. 3, dec. 21: el obispo puede decidir sobre las obras nuevas sólo en las iglesias que no son catedrales, pues en éstas lo que corresponde a la fábrica compete principalmente al cabildo.

Que se especifique que este artículo se entiende sólo donde por legítima costumbre o privilegios los cabildos tienen la administración de la fábrica.

13- Acción 3, dec. 33: cuando se dice que todas las dignidades y la mitad de los canónigos deben ser graduados universitarios, se entiende sin perjudicar las costumbres legítimamente prescritas y confirmadas por la Sede Apostólica.

Como se ve, el nuncio y Velasco recogieron la mayor parte de las apelaciones de los cabildos contra las constituciones provinciales y los obispos compostelanos tuvieron que conformarse. No es extraño pues, el parecer resignado del obispo de Plasencia, que intentaba arañar en el último minuto concesiones a favor de los obispos. La estrategia de Ponce de León parece haberse basado en distinguir claramente entre los cabildos exentos y los que no lo son, para afirmar con toda rotundidad el poder del vicario general del obispo sobre estos últimos. Esto trasladaría la carga de la prueba a los cabildos, quienes deberían demostrar que eran legítimamente exentos; los que no pudiesen probarlo quedarían completamente sometidos. ¿Argumentaba Ponce pensando en el conjunto de la provincia o tenía in mente cuestionar la exención del cabildo de Plasencia?

Sea como fuere, ni el rey ni el nuncio hicieron caso de las precisiones que pedía Ponce de León. Una vez recibidas todas las respuestas de los cabildos y de los obispos, el texto de la concordia fue enviado a Roma sin ninguna modificación. El 27 de diciembre de 1567, mediante el breve *Ex solita Sedis Apostolicae*, Pío V confirmó la concordia. Sin embargo, el nuncio detectó en el texto un pequeño error y Pío V expidió un nuevo breve el 12 de octubre de 1569¹⁵.

3 CONCLUSIÓN

En definitiva, el concilio de Trento y los concilios provinciales inclinaron el fiel de la balanza a favor de los obispos en detrimento de los cabildos catedralicios. Lo demuestra claramente la disparidad entre la ambición de las peticiones que el cabildo de Plasencia presentó al concilio provincial compostelano cuando este fue convocado en 1565, que buscaban una fuerte limitación de los poderes jurisdiccionales del obispo, y la realidad de las constituciones provinciales aprobadas en 1566 por los obispos, contra las que el cabildo apeló por considerarlas contrarias a sus intereses.

Pero ni el concilio de Trento ni los concilios provinciales subsiguientes aplastaron completamente a los canónigos. Si bien estos no vieron recogidas sus peticiones de exención del poder del obispo, al menos tampoco se vieron totalmente sometidos a sus preladados. Las constituciones tridentinas y provinciales, interpretadas estas últimas según las concordias aprobadas por el papa, fijaron el marco legislativo general que debía regular las relaciones entre cabildos y obispos, globalmente favorable a estos últimos. Pero dejaron resquicios para que los cabildos defendieran márgenes de libertad y continuasen haciendo valer en muchos casos sus exenciones y privilegios apostólicos ante los preladados.

Lo que cambió claramente fue el marco geográfico de referencia. Durante el concilio de Trento, los cabildos de la Corona de Castilla intentaron organizar su resistencia colectivamente, de manera coordinada. A partir de 1567, la oposición entre cabildos y

15 El texto en E. Rodríguez Amaya: *Art. cit.*, p. 289-294. Sobre el error, véase Archivo Secreto Vaticano, Segreteria di Stato-Spagna, 4, f. 60.

obispos se desplegó en una sucesión interminable de pleitos y conflictos locales que, por ser locales, siguieron ritmos diversos en cada diócesis y respondieron a relaciones de fuerzas cambiantes¹⁶. Los cabildos continuaron contando con el apoyo de la Curia romana y los obispos mantuvieron el amparo del rey, con lo cual los litigios entre los obispos y los cabildos acabaron convirtiéndose muchas veces, como ya había pasado en la década de 1550, en conflictos de jurisdicción entre la Corona y el Papado. En ese terreno, los capitulares de Plasencia, al igual que muchos de toda la Corona de Castilla, continuaron litigando con sus obispos por múltiples causas durante toda la segunda mitad del siglo XVI¹⁷.

16 I. Fernández Terricabras: *Felipe II...*, *Op. Cit.*, p. 331-359.

17 I. Fernández Terricabras: "Una tipología de conflictos urbanos: cabildos catedralicios y obispos en la España post-tridentina", en José I. Fortea, Juan E. Gelabert, eds.: *Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII)*, Valladolid, 2008, p. 107-124.